



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2.012.

En Pancorbo, siendo las diez horas del día treinta y uno de julio de dos mil doce, se reunió en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria, el Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Carlos Ortiz Caño, con la concurrencia de los señores concejales anotados a continuación:

ALCALDE-PRESIDENTE D. Carlos Ortiz Caño

CONCEJALES D. Javier Vicente Cadiñanos Gago

D. Álvaro Montero Pérez

D^a. Rosa María Ibarrola Sáiz

D^a Hortensia Luisa Pérez Gómez

D. Alejandro Caño Caño

NO ASISTE D. Jaime Estefanía Vilumbrales

Asistidos por el Secretario, D. José Antonio Aguayo Hervías, al objeto de celebrar sesión ordinaria.

Existiendo quórum para constituirse el Pleno y celebrar sesión válidamente, la Presidencia declaró abierto el acto a la hora indicada, procediéndose seguidamente al tratamiento y resolución de los asuntos del orden del día en la forma que sigue:

I

PARTE RESOLUTIVA

Propuestas de la Secretaría:

1. - APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE JUNIO DE 2.012.

Dada cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 1 de junio de 2.012, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, tal y como está redactada.

Propuestas de la Alcaldía:

2.º - EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO) Y DEL IMPUESTO DEL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU).

Se somete a consideración del Pleno, el expediente tramitado conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente a la modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y donde consta:

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del asunto indicado.

Considerando, que la imposición o modificación y ordenación de los tributos locales es competencia del Ayuntamiento Pleno, a tenor del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo necesaria la aprobación de la nueva redacción de las Ordenanzas afectadas por mayoría simple (artº 47.1 LRBRL).

Se abre el oportuno debate, y posteriormente se procede a la votación, y por unanimidad, esta Corporación, **ACUERDA:**





Primero.- Aprobar la modificación en este término municipal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos, con los textos que figuran en el expediente.

Características principales de la modificación:

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

— El tipo de gravamen actual es del 2,00 %, y se mantiene en el 2,00 % (artículo 102.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

— En la actualidad no tiene bonificaciones, y se incluye conforme a las relacionadas en el artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— El pago de la tasa por licencia urbanística no se deduce de la cuota.

— El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación (artículo 103.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

— El Impuesto se gestiona conjuntamente con la tasa por licencia urbanística (artículo 103.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

b) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

— Actualmente para la determinación de la base imponible se aplican los siguientes porcentajes sobre el valor del terreno en el momento del devengo:

- * Período de 1 a 5 años: 2,20.
- * Período hasta 10 años: 2,00,
- * Período hasta 15 años: 2,10.
- * Período hasta 20 años: 2,20.
- * Coeficiente de reducción 1.
- * El tipo de gravamen actual es del 18 por 100.

— Para la determinación de la base imponible, se establece los siguientes porcentajes sobre el valor del terreno en el momento del devengo:

- * Período de 1 a 5 años: 2,70.
- * Período hasta 10 años: 2,50.
- * Período hasta 15 años: 2,30.
- * Período hasta 20 años: 2,00.

Se regula la reducción potestativa cuando se modifiquen los valores catastrales, recogida en el artículo 107.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

— Se prevé una reducción del valor catastral de suelo.

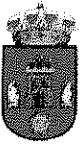
— El tipo de gravamen se fija 20 por 100 (artículo 108.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

— Se aplica la siguiente bonificación:

a) Transmisiones de padres a hijos y a adoptados	90 %
b) Transmisiones entre cónyuges	75 %
c) Transmisiones de hijos y adoptados a padres y a adoptantes	75 %

(artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).





— El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación salvo en el supuesto del artículo 107.2.a), punto 3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo.- Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Tercero.- En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.º- JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO SECCIÓN Nº 2 DE BURGOS. PROCEDIMIENTO ABREVIADO, 63/2012, RECURRENTE LEXECO ASESORES CONSULTORÍA, S. L.

Vista la comunicación del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo sección nº 2 de Burgos, de 28 de mayo del año actual, sobre interposición de recurso contencioso-administrativo por parte de Lexeco Asesores Consultoría, S. L., contra el acuerdo del Ayuntamiento, sobre Administración Local (desestimación por silencio administrativo frente al requerimiento de pago en fecha 5 de octubre de 2.011, en relación con las cantidades adeudadas por ejecución de servicios de consultoría y asesoramiento jurídico, relativa a las facturas 252/11, por importe de 1.416,00 € de fecha 25 de mayo de 2.011 y la 254/11, por importe de 5.374,40 € de fecha 25 de mayo de 2.011).

Teniendo en cuenta que en el expediente no aparecen otros interesados, que, además del Ayuntamiento y de la actora, ha de considerarse interesados en el expediente.

Considerando lo dispuesto en los artículos 23, 48 y siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre representación y defensa de las partes, emplazamiento de la Administración y de los interesados en el expediente.

Conviniendo al interés general del Municipio comparecer y personarse en los autos.

Visto el informe emitido por el Secretario de la Corporación y unido al expediente.

Conforme a las facultades que atribuye al Pleno el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación acordó por unanimidad:

Primero.- Acusar recibo al escrito del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Burgos, de 28 de mayo de 2.012, relativo al expediente de interposición de Recurso contencioso-administrativo: Número de Identificación Único: 09059 45 3 2012 0000170, procedimiento abreviado, nº 63/2012 y remitir el expediente administrativo sobre Administración Local "Reclamación de facturas por la empresa Lexeco Asesores Consultoría, S. L." (desestimación por silencio administrativo frente al requerimiento de pago en fecha 5 de octubre de 2.011, en relación con las cantidades adeudadas por ejecución de servicios de consultoría y asesoramiento jurídico, relativa a las facturas 252/11, por importe de 1.416,00 € de fecha 25 de mayo de 2.011 y la 254/11, por importe de 5.374,40 € de fecha 25 de mayo de 2.011).

Segundo.- Comparecer y personarse en el Procedimiento Abreviado, nº 63/2012 que se sigue ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Burgos y designar para la representación y defensa del Ayuntamiento a los Procuradores de Burgos, D. Jesús Prieto Casado, D^a. Paula Gil-Peralta Antolín y D. Elías Gutiérrez Benito y al Letrado en ejercicio, D. Bernardo Jesús Ventosa Zúñiga.

4.º - ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

En los últimos años, el régimen jurídico tributario local se ha visto afectado por importantes reformas legislativas.

Primero fue la Ley 51/2002, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que estableció novedades de cierto calado en la reordenación de la materia



imponible local, apenas intacta desde la entrada en vigor de la Ley en 1989.

En segundo lugar, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sustituyó a la Ley 230/1963. Con la nueva Ley se complementa la Ley 1/1998, de derechos y garantías de los contribuyentes, cuyos objetivos primordiales eran reforzar los derechos sustantivos de los contribuyentes y mejorar sus garantías en el seno de los distintos procedimientos tributarios. Desde la promulgación de la Constitución estaba pendiente una revisión más profunda de la citada ley, para adecuarla a los principios constitucionales, algo que el legislador aseguró definitivamente con la nueva Ley 58/2003.

Destacar igualmente el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en sucesivas citas T.R.L.H.L.), norma que refunde la materia financiera de ámbito local, constituyendo el principal referente normativo, y el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que al igual que la Ley 58/2003 constituye una norma estatal aplicable en el ámbito recaudatorio local; y que sustituye al anterior Reglamento del año 1990.

Finalmente, mencionar el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

En el ámbito general y de las nuevas tecnologías es obligado resaltar, por su importancia y trascendencia para todo procedimiento administrativo, y en especial para los de carácter tributario, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Teniendo en cuenta que los acuerdos de Pleno por los que el Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de Burgos la gestión tributaria y recaudatoria de sus tributos han sido adoptados con anterioridad a las citadas modificaciones legislativas, surge la necesidad de proceder a una adaptación de los mismos al nuevo régimen jurídico que se deriva de dichas normas.

Por otro lado, y a fin de sistematizar los tributos cuya gestión ha sido delegada, resulta oportuno en el momento actual la adopción de un acuerdo de delegación de funciones, en el cual se determine el ámbito objetivo a que se extiende, enumerando los recursos cuya gestión se delega en la Diputación.

Así pues, teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la realización adecuada de las funciones legalmente atribuidas, y considerando conforme a Derecho proceder a la delegación de éstas al amparo de lo previsto en los artículos 7.1 y 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en sucesivas citas T.R.L.H.L.), el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora las bases del Régimen Local y el artículo 8.b) del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio, el Pleno de la Corporación por unanimidad la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Delegar las funciones de gestión tributaria y recaudación en la Diputación Provincial de Burgos, de acuerdo con el siguiente Convenio:

“CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula Primera.- Objeto de la delegación

1.- El Ayuntamiento de PANCORBO delega en la Diputación Provincial de Burgos las competencias para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de titularidad municipal, en los términos que se especifican en las cláusulas siguientes.

2.- La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y de su ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos.

Cláusula Segunda. Ámbito material de la delegación.

1.-La aplicación de los tributos comprende todas las actividades dirigidas a la información y asistencia a los obligados al pago, a la gestión, recaudación, y a la revisión administrativa de dichas actividades, en relación con los siguientes conceptos tributarios:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto Actividades Economicas.

Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.





2.- La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la recaudación, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes conceptos:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

3.- La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades dirigidas a la recaudación ejecutiva, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con las siguientes deudas impagadas en período voluntario:

- a) Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico.
- b) Recursos de naturaleza pública no tributarios, cuyo vencimiento no sea periódico.

En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o acuerdo del Ayuntamiento, que detallen los conceptos o débitos específicos cuyo cobro en ejecutiva se solicita de la Diputación.

Cláusula Tercera.- Competencias no delegadas.

En el ámbito de la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de su titularidad, el Ayuntamiento se reserva las competencias no recogidas expresamente en la cláusula segunda.

Cláusula Cuarta.- Ambito personal, territorial y temporal de la delegación.

1.- La delegación conferida se refiere expresamente a todas y cada una de las facultades anteriormente enumeradas, y a todos los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.

2.- La Diputación Provincial de Burgos podrá ejercer las facultades delegadas en todo su ámbito territorial, e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

3.- La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial. La revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos dos meses de antelación a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

4.- La Diputación Provincial de Burgos, podrá rechazar aquellas liquidaciones o débitos pendientes que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.

Cláusula Quinta.- Normativa reguladora.

1. La aplicación de los tributos e ingresos de derecho público delegados en la Diputación Provincial de Burgos, se ajustarán a lo previsto:

- a) En la Constitución.
- b) En el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
- c) En la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de Diciembre.
- d) Por las leyes que contengan disposiciones en materia tributaria local; y por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.
- e) Por las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento.
- f) Por el presente Acuerdo de Delegación.
- g) Por la Ordenanza General de Gestión, Liquidación Inspección y Recaudación que pudiere aprobar la Diputación, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15.3 del TRLHL.
- h) Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho administrativo y los preceptos de derecho común.

Cláusula Sexta.- Régimen Jurídico

1.- El presente acuerdo de delegación se adopta al amparo de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 7 del TRLHL.

2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpretación, y cumplimiento, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

3.- Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la Diputación Provincial deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en ningún caso podrá delegar competencias que ejerza por delegación.

Cláusula Séptima.- Administración Electrónica.

1.- Para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público, la Diputación Provincial de Burgos hará uso de tecnologías de la información y la comunicación, en particular internet, para lograr la plena implantación de la Administración Electrónica.

2.- En el ámbito de las funciones delegadas, se garantizará a los ciudadanos los derechos recogidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y, en particular, el derecho a relacionarse con la Diputación utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, establecer pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

Cláusula Octava.- Protección de datos de carácter personal.

1.- En el ejercicio de las funciones previstas en el presente Acuerdo, la Diputación Provincial:





a) Adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de desarrollo.

b) Aprobará por acuerdo de Pleno el fichero denominado "Gestión y Recaudación Tributaria", y lo publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

c) Como responsable del fichero, lo notificará a la Agencia de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación en el BOP.

d) Adoptará todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

e) La denuncia del Acuerdo de Delegación por alguna de las partes implica que la Diputación deberá proceder a la devolución al Ayuntamiento de todos los documentos o soportes informáticos en los que pudiera constar algún dato de carácter personal, y ulteriormente a bloquear y destruir estos datos.

2.- Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Burgos en ejecución de este Convenio, ambas partes se obligan a cumplir con un protocolo de seguridad que garantice que la comunicación de los datos se realice de forma segura, y a asumir las funciones y obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que cada parte custodia.

En particular, se comprometen a:

a) No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad.

b) A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha información.

c) A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos.

d) A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para garantizar la seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

e) A cumplir con el principio de calidad de los datos (Art. 4 de la LOPD).

3.- El Ayuntamiento asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones con la Diputación Provincial de Burgos utilizando los procedimientos y mecanismos definidos para cada caso.

4.- La Diputación de Burgos se compromete a comunicar al Ayuntamiento la información que sea relevante para el mismo en función de lo estipulado en el presente acuerdo.

CAPÍTULO II: FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Cláusula Novena.-Actividades que integran la delegación.

1.- En el ámbito material de la delegación recogido en la cláusula segunda de este acuerdo, la Diputación desarrollará las actividades de:

a) Información y asistencia al obligado al pago.

b) Gestión tributaria.

c) Gestión recaudatoria.

d) Revisión administrativa de las anteriores actividades.

e) Colaboración con la Dirección General del Catastro en el mantenimiento catastral de los municipios de la provincia.

2.- El contenido específico de cada una de estas actividades se describe en las cláusulas siguientes.

Cláusula Décima.-La información y asistencia al obligado al pago.

1.- La Diputación deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia para facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

2.-La actividad a que se refiere el apartado anterior se instrumentará a través de las siguientes actuaciones:

a) Actividades dirigidas a informar a los obligados tributarios de sus derechos y obligaciones, y de la forma en que deben cumplir estas últimas.

b) Actividades dirigidas a garantizar el derecho de acceso a la información personal que obra en el Servicio a los obligados tributarios o a sus representantes, a quienes estos autoricen expresamente, y a quien acredite un interés legítimo y directo. Los obligados tributarios tendrán derecho a la rectificación o cancelación de los datos personales cuando resulten inexactos o incompletos.

c) Actividades dirigidas a facilitar el acceso a los registros y documentos que formen parte de su expediente, que les permita conocer el estado de su tramitación, en los términos y condiciones establecidos en las normas tributarias y administrativas.

d) Asistencia en la realización y correcta cumplimentación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y solicitudes que sean dirigidas a la Diputación Provincial de Burgos o a otras Administraciones implicadas en la gestión de los tributos delegados.

e) Realización de campañas de información y difusión de hechos o situaciones con trascendencia tributaria que afecten al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones.

f) Facilitar los textos actualizados de las normas tributarias de aplicación a los tributos objeto de delegación y de las Ordenanzas Fiscales del municipio en vigor.

g) Comunicación de los criterios administrativos existentes para la aplicación de los tributos.

h) Contestaciones a consultas.

Siempre que sea posible, dichas actividades se podrán efectuar mediante el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos





Cláusula Undécima.-La gestión tributaria.

El desarrollo de la gestión tributaria por la Diputación comporta el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

- a) La elaboración y mantenimiento de los Padrones tributarios.
- b) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
- c) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
- d) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
- e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
- f) La realización de actuaciones de verificación de datos.
- g) La realización de actuaciones de comprobación limitada.
- h) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas, así como su notificación.
- i) La emisión de certificados tributarios.
- j) La información y asistencia tributaria.
- k) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.
- l) Aceptación de las delegaciones de la Administración Tributaria del Estado, y de establecimiento de fórmulas de colaboración previstas en la normativa vigente; en especial, la tramitación de la información remitida por otros Organismos Públicos como la Dirección General de Registros y del Notariado.

Cláusula Decimosegunda.- La recaudación tributaria.

1.- La gestión recaudatoria desarrollada por Diputación consistirá en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.

2.- Se realiza en dos periodos: voluntario y ejecutivo.

3.- La recaudación en período voluntario incluye las siguientes funciones:

- a) Emisión de los documentos cobratorios derivados de las liquidaciones.
- b) Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo.
- c) Determinación de periodos voluntarios de cobranza en el caso de tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva.

d) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

e) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

f) Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.

g) Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

4.- La recaudación en período ejecutivo incluye las siguientes funciones:

- a) Expedición de los documentos que acrediten el impago de las deudas, individuales o colectivas.
- b) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos de reposición interpuestos contra la misma y contra el procedimiento ejecutivo en general.

c) Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora.

d) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

e) Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento General de Recaudación.

f) Dictar diligencias de embargo y resolver los recursos de reposición interpuestos contra las mismas.

g) Practicar el embargo de bienes del deudor para la efectividad de la deuda.

h) Valoración previa a la enajenación de bienes embargados.

i) Adopción de medidas para asegurar el embargo de bienes.

j) Enajenación de bienes embargados.

k) Adjudicación de bienes al Ayuntamiento: cuando en el procedimiento de enajenación, alguno de los bienes embargados no se hubiera adjudicado, podrá el Ayuntamiento adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.

l) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.

m) Dictar el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria, cuando la Diputación Provincial, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de responsabilidad.

n) Dar de baja las deudas apremiadas por alguno de los motivos establecidos en la legislación vigente o en este convenio.

La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en el artículo 76 de la Ley General Tributaria y artículos 61 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. El Ayuntamiento podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.

5.- El Ayuntamiento podrá convenir con la Diputación Provincial de Burgos la realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos diferentes de los señalados con sujeción a los criterios que se



establezcan.

Cláusula Decimotercera.- La revisión de actos en vía administrativa.

1.- La Diputación asume la revisión en vía administrativa de los actos y resoluciones dictados en el ejercicio de las funciones delegadas, en su doble modalidad:

1 Ordinaria, mediante la interposición de recurso de reposición contra los actos dictados por esta Diputación en el ejercicio de sus competencias.

2 Especial, a través de los siguientes procedimientos de revisión:

- a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.
- b) Declaración de lesividad de actos anulables.
- c) Revocación.
- d) Rectificación de errores.
- e) Devolución de ingresos indebidos.

2.- Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de la delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CAPÍTULO III: RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cláusula Decimocuarta.- Colaboración con la Dirección General del Catastro en el mantenimiento catastral de los municipios de la provincia.

1.- En virtud de la delegación conferida en la cláusula segunda, el Ayuntamiento autoriza a la Diputación Provincial de Burgos, como órgano gestor del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a firmar convenios de colaboración en materia catastral con la Dirección General del Catastro.

2.- Para el desarrollo y ejecución de dichos convenios, la Diputación promoverá la contratación - por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación -, de los trabajos de actualización permanente del Catastro, del que se deriva el censo cobratorio y las liquidaciones tributarias por incorporación de alteraciones catastrales de dicho impuesto.

3.- El Ayuntamiento se adhiere a los contratos que la Diputación adjudique con el fin anteriormente descrito, lo que conlleva la obligación de financiar su coste, para lo cual, autoriza a la Diputación a detracer, con cargo al importe de la recaudación obtenida por las liquidaciones tributarias en concepto de IBI de naturaleza urbana que se practiquen como consecuencia de los trabajos realizados por el adjudicatario del concurso, el porcentaje que resulte de la licitación.

Dicho porcentaje no podrá superar en ningún caso el 20 por 100, si la incorporación de la alteración catastral tiene su origen en una declaración presentada por el titular catastral; ni el 30 por 100, si la incorporación tiene su origen en el trabajo de investigación realizado por la empresa en el término municipal del Ayuntamiento.

Se establece además un límite en la cantidad a cobrar por el adjudicatario por liquidación tributaria de 600 euros, de forma que si de la aplicación del porcentaje descrito anteriormente, en función del origen de la incorporación, a las liquidaciones resultara un mayor importe, la adjudicataria no tendría derecho al exceso.

CAPÍTULO III: RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cláusula Decimoquinta.- Colaboración entre las Administraciones implicadas en la delegación.

El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Burgos actuarán y se relacionarán en todo cuanto concierne a la delegación de funciones de acuerdo con el principio de lealtad institucional, y, en consecuencia deberán:

a) Respetar el ejercicio de las competencias por la Administración que la tenga atribuida de conformidad con la distribución realizada en las cláusulas 2ª y 3ª de este documento.

b) Facilitar a la otra Administración la información que precise sobre las actividades que desarrollen en el ejercicio de sus competencias. En particular, se facilitarán cuantos datos personales se recaben en relación con los interesados en los procedimientos que se estén tramitando.

c) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y la asistencia activas que la otra Administración pudiera recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Cláusula Decimosexta.- Procedimiento de cargo y gestión de valores.

1.- Trámites previos al inicio de la actividad delegada.

1.1. El Ayuntamiento delegante deberá entregar, con antelación suficiente, toda la información de que disponga con trascendencia tributaria para facilitar a la Diputación Provincial el ejercicio de las competencias asumidas. En particular, debe proporcionar:

a) Información completa y actualizada de los padrones cobratorios de los tributos delegados.

b) Las domiciliaciones de pago en entidades de depósito de los obligados al pago incluidos en los padrones.

c) Texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de los tributos cuya aplicación haya delegado en la Diputación.

1.2. La información relativa a los obligados al pago deberá contener en todo caso: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa. b) Número del Documento Nacional de Identidad. c) Domicilio del deudor.

d) En su caso, domicilio en el extranjero, código de identificación fiscal del Estado de residencia o número de pasaporte.

1.3. Si la información remitida no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, se requerirá al Ayuntamiento para que, en un plazo de diez días, complete los datos omitidos, con advertencia de que si así no lo



hiciera la Diputación se abstendrá de iniciar la gestión delegada en relación con los obligados afectados.

1.4. Asimismo, deberá comunicar a las Administraciones que participan en la gestión de los tributos locales: Dirección General del Catastro, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jefatura Provincial de Tráfico, la concesión de la delegación de competencias en la Diputación.

2.- Procedimiento de elaboración y actualización de padrones.

2.1. A estos efectos distinguimos dos tipos de padrones:

1 Padrones de gestión compartida entre el Ayuntamiento y otras Administraciones, en los que la Diputación asume la gestión tributaria.

2 Padrones de gestión exclusivamente municipal, en los que la Diputación se limita a desarrollar la gestión recaudatoria.

2.2 Como norma común a ambos: el Ayuntamiento deberá remitir a la Diputación Provincial el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia relativas a tributos que haya delegado.

3.- Padrones de gestión compartida entre el Ayuntamiento y otras Administraciones, en los que la Diputación ha asumido la gestión tributaria

3.1 Son padrones de gestión compartida los correspondientes a los siguientes conceptos tributarios:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

3.2 Los ficheros o bases de datos necesarios para la elaboración y actualización de los padrones cobratorios de estos tributos serán suministrados directamente a la Diputación Provincial por las siguientes entidades públicas

a) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la Dirección General del Catastro.

b) Del Impuesto sobre Actividades Económicas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c) Del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por la Jefatura Provincial de Tráfico.

3.3 El Presidente de la Diputación aprobará estos padrones, por tener asumida la gestión tributaria, y los remitirá posteriormente al Ayuntamiento para su exposición pública a efectos de reclamaciones.

4.- Padrones de gestión exclusivamente municipal, en los que la Diputación se limita a desarrollar la gestión recaudatoria.

4.1 Se entiende por padrones de gestión exclusiva de Ayuntamientos los correspondientes a los siguientes conceptos tributarios:

a) Tasa por suministro de aguas.

b) Tasa por recogida domiciliaria de basuras.

c) Otras tasas de cobro periódico y notificación colectiva.

4.2 Elaborado el primer padrón cobratorio en base a la información facilitada por el Ayuntamiento, para ejercicios sucesivos se seguirá el siguiente proceso previo al inicio del período voluntario de cobro:

-Diputación Provincial remitirá al Ayuntamiento el padrón definitivo del ejercicio precedente.

-Teniendo en cuenta este padrón, el Ayuntamiento comunicará a Diputación las altas, bajas y modificaciones que se hayan producido y que deban surtir efecto para el ejercicio en curso.

-Recibida la susodicha comunicación, Diputación incorporará todas las alteraciones que el Ayuntamiento le traslade, emitirá el padrón definitivo y lo remitirá al Ayuntamiento

-El Ayuntamiento aprobará el padrón por órgano competente y lo expondrá al público a efectos de reclamaciones.

-Ulteriormente, el Ayuntamiento remitirá a Diputación certificado de la aprobación y exposición pública del padrón.

-Cualquier incidencia que surja con posterioridad a la aprobación del respectivo Padrón que suponga una regularización tributaria, determinará la realización por el Ayuntamiento impositor de las actuaciones encaminadas a la liquidación y cobro de las deudas.

5.- Sobre la recaudación ejecutiva de deudas de vencimiento no periódico

5.1 En relación con deudas no periódicas, y una vez agotado el período voluntario de cobro sin que la deuda haya sido abonada, el Ayuntamiento, tras adoptar una resolución en los términos del punto 3 de la Cláusula Segunda, deberá formalizar los siguientes documentos:

• Copia de la notificación cursada al deudor, que deberá haberse practicado en los términos del art. 62.2 de la Ley General Tributaria.

• Certificado del Secretario/a que acredite:

-La firmeza de la deuda, por no haber sido recurrida en tiempo y forma, o por haberse resuelto las reclamaciones que se hayan presentado.

-En el caso de que la deuda haya sido impugnada por el deudor, que no se ha prestado la garantía prescrita legalmente en el caso de que haya interpuesto el recurso correspondiente.

-Formalización de otros documentos que requiera el Servicio Provincial de Recaudación, en los cuales se acrediten el transcurso del período voluntario de pago, los datos personales y fiscales del deudor y la cantidad principal adeudada.

• Acreditados estos requisitos, tales deudas podrán ser cargadas en cualquier época del año.



Cláusula Decimoséptima.- Comunicaciones entre las Administraciones.

1.- En relación con aquellos tributos o ingresos de derecho público en los que el Ayuntamiento se haya reservado las competencias sobre gestión tributaria cediendo la gestión recaudatoria a la Diputación Provincial, aquella Administración deberá comunicar por escrito a ésta cualquier hecho, acto o resolución que tenga incidencia en el procedimiento recaudatorio. En particular:

- a) La modificación de datos personales de los obligados al pago.
- b) La anulación de derechos que haya acordado.
- c) La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios fiscales.
- d) La suspensión del procedimiento recaudatorio

2.- Caso de que el deudor intente realizar el pago de la deuda al Ayuntamiento, éste advertirá al interesado la imposibilidad de efectuarlo, y de la obligación de realizar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial.

Si, no obstante, el deudor llega a realizar el pago de la deuda al Ayuntamiento, éste deberá efectuar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial, quien proseguirá el procedimiento si el importe ingresado no cubre la totalidad de la deuda exigida.

3.- Cuando en el curso del procedimiento recaudatorio se ponga de manifiesto la existencia de un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o que ésta ha sido ingresada, condonada, aplazada, suspendida o prescrita, Diputación suspenderá las actuaciones y dará traslado al Ayuntamiento con objeto de que resuelva lo que estime pertinente.

4.- Cuando la Diputación aprecie que no es competente para resolver un asunto que afecte a la gestión tributaria, no asumida por delegación, lo remitirá al Ayuntamiento con el fin de que dicte la resolución pertinente, sin perjuicio de evacuar los informes que al respecto se le soliciten.

Cláusula Decimoctava.- Convenios con otras Administraciones.

Quando sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines propios de la gestión delegada, la Diputación Provincial podrá firmar Convenios de Colaboración con Administraciones, Organismos Públicos y Entidades Privadas, especialmente con aquellas que participan en la gestión de los tributos locales: Dirección General del Catastro, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jefatura Provincial de Tráfico, Colegio General del Notariado.

CAPÍTULO IV: ASPECTOS ECONÓMICOS.

Cláusula Decimonovena.- Sistema de financiación.

1.- El Sistema de financiación arbitrado obedece a la cobertura del coste que implica la asunción de las competencias delegadas.

2.- La Diputación Provincial percibirá una tasa por la prestación del servicio de cobro de las exacciones periódicas o aperiódicas del Ayuntamiento contratante.

3.- Dicha tasa se regula en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal nº I.1.5, reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recaudación a los Ayuntamientos de la Provincia, aprobada por Acuerdo del Pleno de la Diputación con fecha 28 de Diciembre de 2007, que establece:

• *Por la gestión recaudatoria en voluntaria.*

La cuota de la tasa se obtendrá por la aplicación de un porcentaje sobre el importe íntegro recaudado.

Este porcentaje se determinará en función de la suma del importe total de los padrones tributarios y de las remesas de liquidaciones de ingreso directo, puestos al cobro en periodo voluntario, según la siguiente tarifa:

Hasta 1.000.000 €	4 %
De 1.000.001 € a 2.000.000 €	3 %
De 2.000.001 € a 4.000.000 €	2,50 %
De 4.000.001 € a 5.000.000 €	2,25 %
De 5.000.001 € a 7.000.000 €	2,00 %
Más de 7.000.000 €	1,75 %

• *Por la gestión recaudatoria en ejecutiva, la totalidad de los recargos del periodo ejecutivo ingresados.*

La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio de Recaudación en el momento de realizar la liquidación al Ayuntamiento, quedando facultada la Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la recaudación que realice."

Cláusula Vigésima.- Anticipos a cuenta de la recaudación.

1.- La participación del ayuntamiento en el producto de la gestión recaudatoria desarrollada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Burgos, se hará efectiva mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se practique en el mes de diciembre del ejercicio en curso, con periodicidad mensual y cuantía equivalente a la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de lo establecido en el apartado siguiente

El importe que servirá de base para fijar la cuantía de las entregas a cuenta será el resultado de aplicar el porcentaje del 90% sobre el importe recaudado en el ejercicio anterior por deudas incluidas en los padrones cobratorios de dicho año.

2.- Los padrones cobratorios son los correspondientes a los conceptos siguientes:

- 1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
- 2 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.



- 3 Impuesto sobre Actividades Económicas.
- 4 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- 5 Tasa por Suministro de Agua.
- 6 Tasa por Recogida de Basuras.
- 7 Otros tributos municipales de devengo periódico y notificación colectiva.

3.- Se realizarán once entregas a cuenta, que se harán efectivas en cada uno de los meses comprendidos entre enero y noviembre, ambos incluidos

Cláusula Vigésimoprimer.- liquidación de ingresos.

1.- La liquidación definitiva de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la gestión recaudatoria se practicará en el mes de diciembre del mismo ejercicio, acompañando detalle de las deudas, por tipos de ingresos, conceptos y ejercicios

Del total computado como ingresos se descontarán:

- Los anticipos a cuenta de la recaudación.
- Las devoluciones de ingresos indebidos.
- La tasa por prestación del servicio.
- Las costas devengadas.

2.-Los saldos acreedores a favor de las entidades locales que resulten de las liquidaciones definitivas se harán efectivos en su totalidad en el mes de diciembre del ejercicio en curso, mediante orden de transferencia a la cuenta bancaria que con este fin haya designado el Ayuntamiento.

3.-Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente.

Cláusula Vigésimosegunda.- La Cuenta de Recaudación

La Diputación Provincial rendirá la cuenta anual de la gestión recaudatoria, dentro del mes de enero y referida al ejercicio anterior, especificando, por conceptos y ejercicios, el importe total de las deudas gestionadas, de los ingresos realizados, de las datas aprobadas y de las deudas pendientes de cobro. Como documentación adjunta, se acompañará: relación nominal, por motivos, de las anulaciones de derechos acordadas (separando las anulaciones por insolvencias, para su contabilización independiente) y la relación nominal de deudores.

CAPÍTULO V: EFICACIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO Cláusula Vigésimotercera.- Plazo de vigencia.

El presente acuerdo tendrá vigencia inicial desde que se publique íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 31 de diciembre de 2012, entendiéndose tácitamente prorrogado salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá comunicarse a la otra con una antelación mínima de un mes.

Cláusula Vigésimocuarta.- Otras causas de extinción

1.-Serán causas de extinción del presente acuerdo de delegación, además de la referida en la cláusula anterior, las siguientes:

a) La revocación de la delegación por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento, en los términos del art. 13 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La revocación deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

b) Renuncia, acordada por Pleno de la Diputación Provincial como consecuencia de que el ayuntamiento incumpla reiteradamente las obligaciones esenciales establecidas en este Convenio, desatienda sistemáticamente los requerimientos formulados o la colaboración solicitada por la Diputación, cuando éstas resulten imprescindible para el desarrollo de las funciones delegadas.

La renuncia deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

c) Cualesquiera de las determinadas en la legislación vigente.

2. Extinguida la delegación de funciones, la Diputación Provincial se abstendrá de continuar realizando las funciones delegadas, remitiendo a la mayor urgencia la documentación que tenga en su poder al Ayuntamiento.

Vigésimoquinta - Suspensión

1.- Los respectivos Plenos del Ayuntamiento y de la Diputación podrán acordar la suspensión unilateral del acuerdo cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el mismo por la otra parte.

2.-La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del acuerdo deberá recordar a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta y precisa el incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un mes. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la suspensión.

Vigésimosexta.- Avocación

El Ayuntamiento podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por delegación a la Diputación Provincial, en los términos del artículo 14 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Vigésimoséptima.- Publicación del Convenio y de su suspensión y resolución.



1. El Acuerdo de delegación tendrá efectos a partir de su publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia y en el boletín oficial de la comunidad autónoma de Castilla y León.
2. La suspensión y extinción de la delegación tendrán efectos a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo de Pleno del que traigan causa en el boletín oficial de la provincia.”

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Burgos, Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación.

5º.- ELECCIÓN Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a la Corporación del escrito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 25 de abril de 2.012, advierte de la finalización del mandato del Juez de Paz Titular D^a. Sofía Arín Calvo, el próximo día 3 de octubre de 2.012, requiriendo a este Ayuntamiento para que elija la persona idónea para el mencionado cargo que esté dispuesta a aceptarlo.

Atendido que la elección corresponde al Pleno del Ayuntamiento y visto el informe jurídico emitido por el Secretario – Interventor de la Corporación.

Vista la convocatoria efectuada por la Alcaldía publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, Tablón de Anuncios del Juzgado de Paz, y Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de mayo de 2.012, número 100, y después del periodo de inscripción manifestaron su intención de optar al cargo las siguiente personas:

- D^a. Ruth Vázquez Vadillo, con DNI., nº 71.343.059-A.
- D. Vicente Cadiñanos Morquecho, con DNI., nº 14.860.482-K.

Enterada la Corporación de las normas y disposiciones dictadas al efecto, y hechas las aclaraciones que se solicitaron.

Seguidamente se procedió a efectuar la elección del aspirante que habría de ser propuesto para su designación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, para el cargo de Juez de Paz Titular de este Municipio, y la Corporación, previa votación realizada al efecto, se obtiene el siguiente resultado:

- D^a. Ruth Vázquez Vadillo, votos 4
- D. Vicente Cadiñanos Morquecho, votos 1
- Abstención: 1

La Corporación **ACUERDA:**

Primero.- Proponer como Juez de Paz titular de este Municipio a D^a. Ruth Vázquez Vadillo, al considerar que es persona idónea que reúne las condiciones de los artículos 102 y 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 389 a 397 de la propia Ley.

Segundo.- Proponer su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, por conducto del Juez de 1^a Instancia e Instrucción de Miranda de Ebro conforme a lo previsto en el artículo 7* del Reglamento de los Jueces de Paz aprobado por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1.995 (BOE de 13 de julio).

6.º - APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2.011.

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.011, en el que consta la documentación prevista en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, formada por la Intervención e informada por la Comisión Especial de Cuentas, tras ser expuesta al público mediante anuncio insertado en el “Boletín Oficial” de la provincia de Burgos y el Tablón de Edictos de la Corporación durante el periodo reglamentario, no se han producido reclamaciones, reparos u observaciones.





Seguido el trámite y procedimiento legalmente establecido en los artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la aprobación del expediente de Cuenta General, entendiéndose que las expresadas Cuentas están debidamente formadas y hallándolas conformes, considerando que la aprobación de las mismas es competencia del Pleno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.011, tal y como está redactada, con sus estados y cuentas anuales, así como sus anexos y justificantes.

Segundo.- Rendir la Cuenta General 2.011 ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2002 de 9 de abril, Reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León en relación con los artículos 212.5 y 223. 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 104 de la ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, por medios telemáticos, a través de la Plataforma para la Rendición de Cuentas.

7.º - GESTIÓN DEL TELECENTRO DE PANCORBO.

Dada cuenta.

Resultando, que, ante la falta de un local municipal apropiado para ello, se convino con el Sr. Cura Párroco de la localidad establecer momentáneamente las instalaciones del Telecentro de Pancorbo en la Casa Parroquial y encomendarle al propio tiempo la atención básica del servicio, todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación de fecha 28 de septiembre de 2.009.

Teniendo en cuenta, que la prestación del servicio es de interés para la población porque pone a su disposición herramientas básicas para el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación.

Teniendo en cuenta, que el servicio viene prestándose ininterrumpidamente desde finales de junio de 2.009.

Teniendo en cuenta, que corresponde al Ayuntamiento afrontar los gastos de funcionamiento del servicio, entre los que ha de incluirse una compensación económica, por pequeña que sea, a la parroquia por la ocupación del local de su propiedad y por la responsabilidad de atender el servicio, además de los gastos correspondiente de agua, luz, calefacción, etc... Y que el importe de tales gastos, establecido por mutuo acuerdo de las partes en 250 euros mensuales por todos los conceptos, es claramente inferior a los precios normales de mercado y por tanto está suficientemente justificado.

Con el informe favorable del Secretario-Interventor de la Corporación, en cuanto al reconocimiento de la consiguiente obligación económica.

La Corporación por unanimidad **ACUERDA:**

Conceder a la Parroquia de Pancorbo una ayuda económica mensual de 300 euros en compensación por los gastos de instalación, mantenimiento y atención del Telecentro de Pancorbo en la Casa Parroquial, con efectos del día 1 de agosto de 2012 y mientras se mantengan las actuales circunstancias de ubicación, mantenimiento y atención del Telecentro.

II

PARTE DE CONTROL

Seguimiento de Gestión de los órganos de gobierno.

8.º - RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA.

Por la Secretaría de la Corporación, a efectos de su ratificación o de su conocimiento, se da lectura de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía, en relación con los Decretos números, 89 al 142.





El Pleno, se dio por enterado.

9.º - ASUNTOS URGENTES, (FUERA DEL ORDEN DEL DÍA).

Seguidamente se informa de la existencia de diversos asuntos que, a pesar de no figurar en el Orden del Día, es necesario tratar como consecuencia de su urgencia. Por ello, y a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, se acuerda, por unanimidad, declararlos de urgencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47.2, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y se pasan a tratar los asuntos siguientes:

9.º 1 - CONFORMIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE CONCESIÓN DE TERRENOS EN EL MONTE DE U.P. Nº 200 "MONTEMAYOR", A FAVOR DE SOMACYL.

Teniendo en cuenta que por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por el Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural de Burgos, ha remitido el Pliego de condiciones de concesión de terrenos en el MUP 200 "Montemayor" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Burgos, perteneciente al Ayuntamiento de Pancorbo y situado en el Término Municipal de Pancorbo, provincia de Burgos a favor de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), para el abastecimiento de agua a los pueblos de la Mancomunidad "Desfiladero y Bureba", relativo a la obra "Bureba-Norte. Abastecimiento desde Pancorbo (Burgos). Clave: 21-BU-373/P", la superficie ocupada será de 13.494 m², por un periodo de veinticinco (25) años, a los que hay que añadir la ocupación temporal durante dos (2) años de 752 m².

De los 14.246 m², afectados por la autorización, 505 m², pertenecen a la ocupación de una zanja de acometida eléctrica, 2.865 m², al entorno del depósito principal y 10.876 m², a diversos tramos subterráneos de conducciones y se establece un canon único de concesión de 14.806,23 €.

Con el fin de agilizar al máximo la realización de los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la autorización de la actividad privativa del dominio público forestal, la Corporación Municipal, por unanimidad de los asistentes, ACUERDAN:

Primero.- Prestar conformidad al Pliego de condiciones de concesión de terrenos en el monte de U.P. nº 200 "Montemayor" a favor de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), para el abastecimiento de agua a los pueblos de la Mancomunidad "Desfiladero y Bureba".

Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

10.º - MOCIONES:

1.º- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PCAL, RELATIVA AL PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADO "ROJAS", Nº 4851, A LA EMPRESA "TROFAGÁS HIDROCARBUROS S.L."

Por el Portavoz del Grupo Municipal PCAL, al amparo del reglamento vigente, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate y votación por el Pleno, relativa a la extracción de gas no convencional, para el Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado «Rojas» n.º 4851 en la provincia de Burgos, que afecta a nuestro municipio y su entorno.

Dada cuenta de su contenido por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PCAL, resulta del tenor literal siguiente:

"MOCIÓN

RELATIVA AL PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADO "ROJAS", Nº 4851, A LA EMPRESA "TROFAGÁS HIDROCARBUROS S.L."

Que presenta D. Javier Vicente Cadifñanos Gago, Teniente-Alcalde, Portavoz del Grupo Municipal PCAL del Ayuntamiento de Pancorbo en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y votación, relativa a la extracción de gas no convencional, para el Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado «Rojas» n.º 4851 en la provincia de Burgos, que afecta a nuestro municipio y su entorno, la siguiente MOCIÓN:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La fractura hidráulica (comúnmente conocida en inglés como *hydraulic fracturing* o *fracking*) es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases.

Un informe elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo, de junio de 2011, rechaza la fracturación hidráulica como técnica de investigación y de extracción de gas, debido a sus dañinos efectos ambientales entre los que se encuentran: contaminación atmosférica, contaminación de aguas subterráneas y superficiales provocada por escapes o vertidos de fluidos o gases tóxicos, fugas de líquido de fracturación y descargas no controladas de aguas residuales. Es importante destacar que también se rechaza como técnica de investigación, que es la fase en la que se encuentran la mayoría de los permisos que afectan a la provincia de Burgos.

Teniendo conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, nº 123, de 27 de junio de 2011, el otorgamiento del Permiso de Investigación de hidrocarburos "ROJAS", nº 4851, a la empresa "Trogas Hidrocarburos S.L.", por parte de la Consejería de Economía y Empleo del Servicio Territorial de Burgos, y que dicho permiso afecta a este término municipal de Pancorbo y colindantes; que comprende una superficie de 94.896 Has., afectando a los términos municipales de *Abajas, Aguas Candidas, Aguilar de Bureba, Altable, Los Altos, Los Barrios de Bureba, Berzosa de Bureba, Bozoó, Briviesca, Busto de Bureba, Cantabrana, Carcedo de Bureba, Cascajares de Bureba, Comunidad de Cubo de Bureba y Santa María-Ribarredonda, Cubo de Bureba, Encio, Frias, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña, Llano de Bureba, Merindad de Río Ubierna, Miraveche, Monasterio de Rodilla, Navas de Bureba, Oña, Padrones de Bureba, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Piérnigas, Poza de la Sal, Prádanos de Bureba, Quintanabureba, Quintanaelez, Quintanavides, Quintanilla San García, Reinoso, Rojas, Rublacedo de Abajo, Rucandio, Salas de Bureba, Salinillas de Bureba, Santa Gadea de Cid, Santa María Ribarredonda, Santa Olalla de Bureba, Vallarta de Bureba, Valle de las Navas, Valle de Tobalina (Mancomunidad de Nueve Villas de Sopellano), Valluercanes, La Vid de Bureba, Vileña, Villanueva de Teba y Zuñeda* de la provincia de Burgos.

Esta investigación va encaminada a la posible extracción de gas no convencional mediante la técnica de fracturación hidráulica, y que todavía no se ha resuelto la adjudicación de este permiso.

Esta técnica ha sido muy utilizada en EE.UU. donde se empieza a relacionar con contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales con gases y sustancias químicas; además de conllevar un elevado consumo de agua, impactos al paisaje, ruidos, microseísmos, contaminación del aire y posibles afecciones a la salud humana por el uso de productos químicos nocivos y tóxicos. Conociendo los perjuicios que dicho permiso de investigación además de la consiguiente explotación, causaría a la salud de nuestro vecinos, a la agricultura, a la ganadería, a nuestro entorno al área del Parque Natural "Montes Obarenes-San Zadornil", a los LICs, ZEPA, etc.

A día de hoy, este Ayuntamiento no tiene ninguna noticia por parte de la Junta de Castilla y León ni del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre estos posibles permisos en nuestro municipio. Lo que es preocupante ya que según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, artículo 9, apartado 2, el otorgamiento de un permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área, previo cumplimiento de las condiciones a que se refiere el Capítulo III de la Ley.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal de PCAL, propone al Pleno de la Corporación, la adopción de las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO.- Este Ayuntamiento, manifiesta su rechazo y disconformidad con la licencia de investigación de hidrocarburos "ROJAS", nº 4851, concedida a la empresa "Trogas Hidrocarburos S.L.", para la realización de prospección en busca de gas, y solicita que se revoque la misma.

SEGUNDO.- Este Ayuntamiento, manifiesta su malestar y preocupación por la puesta en marcha de planes de explotación de hidrocarburos por medio de la técnica conocida como FRACTURA HIDRÁULICA, e insta al Gobierno de España a elaborar una norma que prohíba dicha técnica. Además, exigir que se facilite la información a los municipios afectados antes de la concesión del permiso de investigación para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas disponiendo de toda la



información posible; así como que se lleve a cabo un análisis del ciclo de vida del proyecto, y de los costes y beneficios.

TERCERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro a no conceder los permisos de captación de agua que se soliciten para la realización de proyectos de FRACTURA HIDRÁULICA para evitar el agotamiento de los recursos hídricos de esta zona y su contaminación.

CUARTO.- Instar a la Junta de Castilla y León a convocar urgentemente una mesa sectorial en la que se invite especialmente a los municipios de la zona afectados,

QUINTO.- Solicitar a la Junta de Castilla y León la realización de unas jornadas informativas abiertas en la ciudad de Burgos, que expongan a la opinión pública los diferentes puntos de vista de administraciones, empresas y entidades y organizaciones conservacionistas.

SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo a todos los municipios de la afectados por el permiso "Rojas" afectados el contenido íntegro de este acuerdo adoptado para su conocimiento, valoración y asunción de acuerdos plenarios equivalentes dada la potencialidad del daño al medio en la extracción de gas no convencional mediante la técnica propuesta.

SÉPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Energía y Turismo, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Presidente de la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Burgos, a la Subdelegación del Gobierno en Burgos, a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, y a los portavoces de los grupos políticos mayoritarios representados en estas instituciones, así como a la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Pancorbo, a 25 de julio de 2012

Firmado: D. Javier Vicente Cadiñanos Gago"

Sometida a votación la proposición realizada por el Portavoz del Grupo Municipal PCAL, se obtiene el siguiente resultado:

- Votos a favor: 6
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 0

La Presidencia declara aprobada por unanimidad, la proposición presentada, en los términos planteados.

11.º - RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Concejal, D. Alejandro Caño Caño, formula las siguientes preguntas:

- Estado sobre el pago de los lotes del Coto de Caza.

El Sr. Alcalde, le contesta que se ha realizado el pago.

- Sobre la finca donde se ha construido el pabellón de la Mancomunidad "Desfiladero y Bureba"

El Sr. Alcalde, manifiesta que se ha adquirido a los propietarios conforme al Convenio urbanístico de planeamiento y gestión entre el Ayuntamiento de Pancorbo y la Autoridad Portuaria de Bilbao, para la reordenación del polígono industrial-logístico "El Prado" y desarrollo de suelo urbanizable, al objeto de viabilizar la instalación de una Terminal Logística-Ferroportuaria en Pancorbo.

Llegados a este punto y no siendo otro el objeto de la presente reunión, cuando eran las diez y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, la Presidencia levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. Doy fe.

Carlos



[Firma manuscrita]